



Resolución de Superintendencia

N° 1023-2018-SUCAMEC

Lima, 24 OCT 2018

VISTO: El recurso de apelación interpuesto el 13 de setiembre de 2018 por el señor Percy Efrin Soto Flores, contra la Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 06 de agosto de 2018, el Memorando N° 2745-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 03 de octubre de 2018, el Dictamen Legal N° 00448-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 18 de octubre de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal t) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN y modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra actos administrativos emitidos por los órganos de línea y desconcentrados de la SUCAMEC;

Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que: *"El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho (...)"*;

Que, con Registro N° 201800248152 de fecha 10 de julio de 2018, el señor Percy Efrin Soto Flores (en adelante, el administrado) solicitó a la SUCAMEC la emisión de licencia de uso de armas de fuego en la modalidad de caza;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 06 de agosto de 2018, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (en adelante, la GAMAC) desestimó la solicitud del administrado, por registrar antecedente histórico de condena por delito doloso en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial; asimismo, dispuso la incorporación de los datos del administrado en el registro de inhabilitados de la SUCAMEC; además, encomendó a la Unidad Funcional no Orgánica de Arsenales y Verificación de Armas de la GAMAC, el cambio de situación del arma de fuego tipo carabina, marca Marlin, calibre 22 LR con serie N° 04258032, de internado temporal a internado definitivo;

Que, el día 13 de setiembre de 2018, el administrado interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC solicitando que la misma se deje sin efecto, para lo cual señala que dicha resolución es nula de pleno derecho, ya que no se ha cumplido con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, al no haberse motivado la resolución impugnada. Asimismo, señala que se ha desestimado su solicitud de emisión de licencia de uso de arma de fuego aplicando el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN y sustentándose en el numeral 22.6 del artículo 22 de la Ley N° 30299, así como en el artículo 42 del Reglamento, por lo que la resolución impugnada resulta arbitraria, pues considera que se contrapone a los artículos 69 y 70 del Código Penal. Además, según el administrado existe duplicidad de sanciones administrativas y penales, lo cual vulneraría el principio de NON BIS IN IDEM, dado que se encuentra rehabilitado de la sanción penal que el juzgado le impuso hace muchos años, añadiendo que producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona; precisa, además, que se encuentra rehabilitado mediante resolución judicial, la cual



ordena la cancelación de sus antecedentes. Igualmente, señala que existe una sola posibilidad de la aplicación retroactiva de la norma (en el caso penal), y ésta se da por efectos del artículo 103 de la Constitución, indicando el administrado que *"en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera"*;

Que, también sostiene que la SUCAMEC estaría intentando apropiarse de un bien propio que no le pertenece al ordenar el internamiento definitivo del arma de fuego y que esto va en contra del principio constitucional establecido en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución sobre el derecho a la propiedad y a la herencia, así como también en el artículo 70, sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad;

Que, en cuanto a lo alegado por el administrado respecto a que "la Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC es nula de pleno derecho, ya que no se ha cumplido con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, al no haberse motivado la resolución impugnada", cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en el fundamento 20 del Expediente N° 03891-2011-PA/TC, ha señalado que *"la motivación puede generarse previamente a la decisión – mediante los informes o dictámenes correspondientes – o concurrentemente con la resolución, esto es, puede elaborarse simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución. La Administración puede cumplir la exigencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus propias razones en los considerandos de la resolución, como también a través de la aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos por sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente por número, fecha y órgano emisor"*;

Que, en esa línea interpretativa, resulta pertinente indicar que la GAMAC ha cumplido con la exigencia de motivar el acto administrativo que desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego, pues generó su decisión en consideración al **Informe N° 4217-2018-UNF-LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC** de fecha 02 de agosto de 2018, emitido por el Área de Licencias de la GAMAC, el cual es mencionado en el texto de la Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC, por lo tanto, no se advierte causal de nulidad;

Que, en cuanto a lo referido por el administrado en relación a que "la resolución impugnada al sustentarse en el inciso 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN y la Ley N° 30299, resulta arbitraria porque se contrapone a los artículos 69 y 70 del Código Penal", al respecto, cabe indicar que dicha aseveración carece de sustento, ya que no nos encontramos ante un conflicto normativo; es decir, normas legales que plantean consecuencias jurídicas distintas, de tal forma que la aplicación de una de ellas implicaría la violación de la otra, ello no ocurre en el presente caso, puesto que la GAMAC aplicó la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil (en adelante, la Ley N° 30299) y su Reglamento, en estricto cumplimiento del Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del T.U.O. de la Ley N° 27444, el cual dispone que toda actuación de la Administración siempre debe estar enmarcada dentro de una norma legal autoritativa que la faculte a realizar determinada acción administrativa, dado que los sujetos de derecho público solo pueden hacer aquello que está expresamente permitido y atribuido por las normas que regulan su competencia, en este caso, la Ley N° 30299 y su Reglamento;

Que, al determinarse que el administrado figura en el Registro Nacional de Condenas por delito doloso, se incumplió con el requisito de otorgamiento y renovación de licencias establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley y en el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento; razón por la cual la GAMAC, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, desestimó su solicitud en aplicación estricta del Principio de Legalidad;



J. DULANTO



Vº Bº
J. Dulanto



Vº Bº
C. Verástegui



Resolución de Superintendencia

Que, en tal sentido, la validez de toda acción administrativa se encuentra necesariamente vinculada a lo dispuesto en la Ley, por lo que una vez que la norma se encuentra vigente (en este caso particular, la Ley N° 30299 y su Reglamento), toda actuación decisoria de la administración pública se encuentra inexorablemente sujeta a ella (en aplicación del Principio de Legalidad), por lo tanto, no puede dejarse de aplicar la Ley o emitir pronunciamiento en sentido contrario a ella (con tan solo interpretar que la misma es inconstitucional), toda vez que la autoridad administrativa se encuentra obligada a ejecutarla y cumplirla; bajo ese análisis, se desprende que la aplicación del literal b) del artículo 7 de la Ley N° 30299, no contraviene o vulnera algún derecho o garantía establecida en nuestra Constitución Política;

Que, con relación a lo alegado por el administrado de que se estaría vulnerando el principio del "NON BIS IN ÍDEM", donde determina una interdicción de duplicidad de sanción administrativa y penal, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1670-2003-AA/TC, ha establecido que: "(...) *El principio no bis in ídem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado (...)*";

Que, en ese entender, se puede apreciar que la GAMAC desestimó la solicitud de emisión de licencia de uso de arma de fuego, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N° 30299 (literal b del artículo 7) y en el Reglamento (inciso 7.1 del artículo 7), el cual señala como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: **No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena y no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos**; por lo tanto, el procedimiento administrativo seguido por la SUCAMEC es totalmente distinto al proceso judicial que se le siguió por delito doloso; en tal sentido, en el presente caso no se ha afectado el principio de NON BIS IN ÍDEM;

Que, en cuanto a lo referido por el administrado sobre que "existe una sola posibilidad de la aplicación retroactiva de la norma (en el caso penal), y ésta se da por efectos del artículo 103 de la Constitución", cabe señalar que en el sustento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC se establece que: "*en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)*". Así tenemos que, para toda consecuencia jurídica se debe tener presente la regulación constitucional sobre la aplicación de las normas en el tiempo pues ésta, de manera general, se encuentra prevista en el artículo 103 de la Constitución en los términos siguientes: "*La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo*". Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone que: "*La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte*";

Que, a partir de estas disposiciones normativas se entiende que en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición expresa de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, o que permite que la legislación precedente siga produciendo efectos de manera ultractiva. Entonces, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también



J. DULANTO



Vº Bº

J. Dulanto



Vº Bº

C. Verástegui

a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, lo que incluye a aquellas surgidas bajo la legislación anterior y que aún produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción, mediante reglas de derecho transitorio, a efectos de facilitar el tránsito de un régimen legal a otro nuevo;

Que, en ese sentido, la Ley N° 30299 dispuso la derogatoria de la Ley N° 25054, según lo previsto en su Única Disposición Complementaria Derogatoria, por lo que al aprobarse su Reglamento, dichos cuerpos normativos entraron en vigencia el 06 de julio de 2016 y 02 de abril de 2017, respectivamente. En virtud de ello, todo procedimiento iniciado a partir de dichas fechas se registrará por la Ley N° 30299 y su Reglamento;



Que, lo referido por el administrado en relación a que *“...de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera...”*, cabe indicar que a través de la sentencia STC N° 4293-2012-PA/TC emitida el 18 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional resolvió dejar sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC N° 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se establecía que: *“Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución”*; en tal sentido, la SUCAMEC no se encuentra facultada para inaplicar la Ley N° 30299, ni le corresponde determinar la inconstitucionalidad de la misma;



Que, por otro lado, cabe indicar que no existe violación alguna sobre el derecho de propiedad del administrado, puesto que la SUCAMEC actúa conforme a la potestad otorgada por la Ley N° 30299, siendo que en el presente caso se ha dispuesto el internamiento definitivo de dicha arma, al amparo del artículo 41 de la referida Ley, que a la letra dice: *“La SUCAMEC decide el destino final de las armas de fuego, municiones y materiales relacionados incautados, decomisados, (...) optando por su asignación para el servicio de la Policía Nacional del Perú, la venta vía subasta o remate, su donación a los clubes de tiro debidamente acreditados o museos cuando las características del arma incautada lo amerite. En caso contrario son destruidos”*;

Que, finalmente, cabe precisar que la GAMAC desestimó la solicitud de licencia de uso de arma de fuego presentada por el administrado en virtud del artículo 42 del Reglamento que señala que *“la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento”*, ya que registra antecedente histórico de condena por delito doloso, conforme se observa del Oficio N° 86955-2018-B-WEB-RNC-GSJR-GG de fecha 11 de julio de 2018, a través del cual el Jefe del Registro Nacional Judicial señala que el administrado cuenta con antecedente por delito doloso en el Registro Nacional Histórico de Condenas del Poder Judicial, a raíz de la sentencia condenatoria impuesta por el 004º Juzgado de Instrucción del Callao, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud; por lo tanto, el administrado no cumple con la condición para la obtención y renovación de licencias, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley N° 30299, esto es: *“No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena”*, la cual es una condición distinta a la de “no registrar antecedentes penales”;



Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IV del TUP de la Ley N° 27444, sobre los Principios de Legalidad y Razonabilidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, por lo que la autoridad administrativa al adoptar sus decisiones debe actuar sin sobrepasar los límites de la atribución conferida por la ley, observando la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos bajo su tutela, de tal manera que la decisión tienda a su cometido, ciñéndose estrictamente a la norma legal;



Resolución de Superintendencia

Que, de acuerdo a lo establecido en el Dictamen Legal N° 00448-2018-SUCAMEC-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, la denegatoria de licencia dispuesta por la GAMAC se efectuó en el marco de lo establecido por la Ley N° 30299 y su Reglamento, normas vigentes y de obligatorio cumplimiento al momento de expedirse la resolución impugnada, encontrándose debidamente motivada, habiendo actuado en virtud del Principio de Legalidad. Asimismo, considerando lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del TUE de la Ley N° 27444, el dictamen legal debe ser notificado al administrado conjuntamente con la presente resolución;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Gerente General (e);

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la SUCAMEC, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

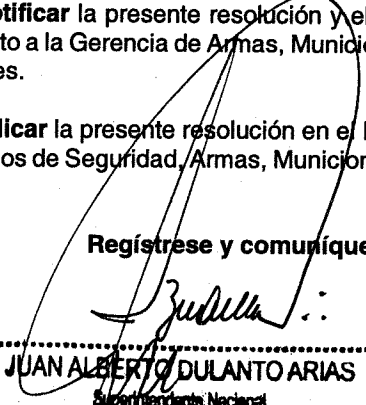
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar desestimado el recurso de apelación interpuesto por el señor Percy Efrin Soto Flores, contra la Resolución de Gerencia N° 4490-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 06 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, dándose por agotada la vía administrativa.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución y el dictamen legal al señor Percy Efrin Soto Flores, y poner de conocimiento a la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC para los fines correspondientes.

Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


.....
JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

